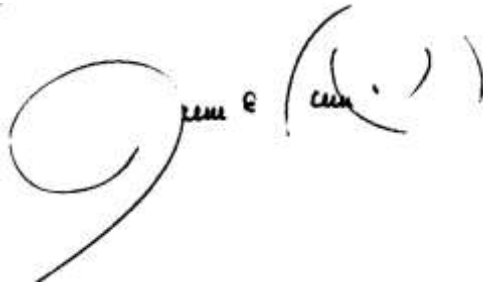


Verbal Rad. 2019-00499-00

A despacho hoy 15 de febrero de 2021.

Informe secretarial. Informando a la señora juez, que en escrito que reposa en el cuaderno principal número 3, la EPS SANITAS, solicita se deje sin efecto el auto del 24 de febrero de 2020, que no tuvo en cuenta la contestación de la demanda de dicha EPS, por extemporánea, cuando en realidad, contestó en tiempo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joaquin Eladio Vargas Montoya', with a stylized flourish at the end.

JOAQUIN ELADIO VARGAS MONTOYA
SECRETARIO

JUZGADO CUARTO CIVIL DE CIRCUITO

Pereira, Risaralda, febrero diecinueve de dos mil veintiuno.

Procede el Juzgado a resolver sobre la solicitud presentada por la apoderada especial de la EPS SANITAS, en cuanto a que se deje sin efecto el auto mediante el cual no se tuvo en cuenta su contestación, o en el caso de no dejarlo sin efecto, propone nulidad conforme a los numerales 3 y 5 del artículo 133 del Código General del proceso.

Cimenta la apoderada su petición, especialmente, en los siguientes argumentos:

Que la decisión del juzgado de no tener por contestada la demanda por extemporánea, resulta ilegal, cuando en realidad no había lugar a ello; toda vez que los términos para contestar, se encontraban suspendidos por auto dictado por este juzgado, hasta tanto recibiera copia del traslado y anexos de la demanda.

Así mismo trae jurisprudencia en lo atinente a que los autos ilegales no tienen ejecutoria y no atan al juez, ni a las partes, por ser decisiones que pugnan contra el ordenamiento jurídico. (Cita sentencia de la Corte Suprema Rad. 47001233300020139006601(21901)).

Consideraciones

Es sabido que la vulneración al debido proceso y el de defensa, atenta contra la seguridad jurídica.

Señaló la Corte Suprema de Justicia en varias providencias; por ejemplo, en el auto del 23 de enero de 2008, en el que fue ponente la Magistrada Isaura Vargas Díaz, radicación 32964:

"Para superar lo precedente basta decir que, como lo ha señalado de antaño la jurisprudencia, a pesar de la firmeza de un auto, no se convierte en ley del proceso sino en la medida en que se acompasa con el ordenamiento jurídico. En este caso, bien se ha visto, el referido auto de 20 de septiembre de 2007 tuvo como fuente un error secretarial y con él se desconoció el ordenamiento jurídico al desatender la realidad procesal de que los recurrentes sí presentaron el recurso de casación en tiempo, por tanto, no puede considerarse vinculante ni para las partes ni para la Corte.

"Bastante se ha dicho que el juez no puede de oficio ni a petición de parte revocar, modificar o alterar un auto ejecutoriado, **pero también, que el error cometido en una providencia no lo obliga a persistir en él e incurrir en otros**, menos, cuando su causa, como en este caso ocurrió, fue precisamente otro error. Por lo dicho, debe atenderse el aforismo jurisprudencial que indica que *'los autos ilegales no atan al juez ni a las partes'* y, en consecuencia, apartarse la Corte de los efectos de la mentada decisión.

Tesis que de alguna manera ha acogido la Corte Constitucional en casos de ilegalidad como el presente; por ejemplo, en sentencia T-1274 de 2005 expuso:

Así, pues, bajo esta perspectiva no cabe duda que en el asunto sometido a examen el juez excedió sus competencias e incurrió en una vía de hecho judicial que, por no poder ser controvertida a través de otro mecanismo judicial -dado que el accionante los agotó todos-, debe ser conjurada por el juez constitucional.

"Sin embargo, no desconoce la Corte que, tal como se argumentó por la autoridad judicial accionada, respecto de la regla procesal de la irrevocabilidad de los autos, la Corte Suprema de Justicia ha establecido por vía jurisprudencial una excepción fundada en que los autos manifiestamente ilegales no cobran ejecutoria y por consiguiente no atan al juez – antiprocesalismo–.

"De cualquier manera y si en gracia de discusión se acogiera por la Sala este criterio, se tiene que la aplicación de una excepción de estas características debe obedecer a criterios eminentemente restrictivos, pues de no ser así, so pretexto de enmendar cualquier equivocación, el operador jurídico puede resultar modificando situaciones jurídicas constituidas de buena fe respecto de terceros con fundamento en las providencias judiciales y desconociendo con ello normas de orden público, así como el principio de preclusión de las etapas procesales. De manera que no cabe duda que de admitirse la aplicación de esta excepción, la misma sólo procede cuando en casos concretos se verifica sin lugar a discusión que se está frente a una decisión manifiestamente ilegal que represente una grave amenaza del orden jurídico y siempre que la rectificación se lleve a cabo observando un término prudencial que permita establecer una relación de inmediatez entre el supuesto auto ilegal y el que tiene como propósito enmendarlo. (rayas ajenas al texto original).

En este caso, la apoderada judicial de la EPS SANITAS, fue notificada por aviso el viernes 13 de diciembre de 2019. El aviso quedó surtido el 16 de diciembre de 2019,

trascurrieron los días inhábiles 14 y 15 de diciembre de ese mismo año.

Para retirar los anexos de la demanda le transcurrieron los días 18 y 19 de diciembre de 2019 y el 13 de enero de 2020. (El 17 de diciembre día de la Rama Judicial, entre el 20 de diciembre al 13 de enero de 2020 transcurrió la vacancia judicial.).

La abogada de Sanitas EPS, se presentó al juzgado a retirar los anexos, el 14 de enero de 2020, pero se le informó que no había traslado y anexos de la demanda para entregarle, lo que indicaba que no contaba con documentación completa para contestar el libelo; razón por la que esta célula judicial dejó constancia de ello el 14 de enero y, el 16 de enero de 2020, dictó auto requiriendo a la parte actora para que allegara copia de los anexos de la demanda; así mismo, en dicho proveído, que se notificó el 17 de enero en estado No. 004, se ordenó **suspender el término** a la EPS SANITAS, para contestar el libelo, hasta tanto recibiera dicho traslado.

Solo hasta el 27 de enero de 2020, la abogada de dicha EPS., vino a recibir las copias; quedando claro que para contestar le venció a la EPS el término así: 18 y 19 de diciembre de 2019, 28, 29, 30 y 31 de enero de 2020 y del 3 al 20 de febrero de 2020. Contestó oportunamente el 13 de febrero de 2020. Inhábiles los días 1º, 2, 8, 9, 15 y 16 de febrero del año pasado.

Entonces, devino anacrónica, la decisión del juzgado de haber tenido por extemporánea la contestación de la EPS SANITAS; en auto del 24 de febrero de 2020, (Cuaderno principal No. 3), pues se cometió el yerro involuntario de no tener en cuenta que el término para contestar la demanda por parte de Sanitas S.A., se había suspendido con auto proferido el 16 de enero de 2020; el cual venía corriendo desde que quedó surtido el aviso, esto es el 16 de diciembre y que empataría con el 28 de enero de 2020, día siguiente de haber recibido la abogada las copias; vendiéndose para que contestara el 20 de febrero y, que oportunamente el 13 de febrero lo hizo.

Considera el despacho que es forzoso dejar sin efecto el inciso cuarto del auto proferido el 24 de febrero de 2020, pues le asiste razón a la apoderada judicial de la EPS en mención, en cuanto a que los autos ilegales no atan al juez, pues la circunstancia sucedida, respecto a no tener la citada EPS, copia del traslado y los anexos de la demanda, para poder ejercer el derecho a la defensa, no podía dejarse pasar por alto; razón por la que este juzgado por auto, suspendió los términos para que se contestara hasta tanto se entregaran las referidas copias.

Entonces, se torna más que evidente que hubo un error del juzgado, al cometer la irregularidad de no tener por contestada la demanda, dejar pasar dicho error y continuar en él; pese a que cobró firmeza la providencia dictada el 24 de febrero de 2020, sería contrariar los mandatos legales, afirmándose que la contestación de la EPS Sanitas, era extemporánea, cuando la realidad es que contestó legalmente y

de manera oportuna. De no corregir esa equivocación, se estaría contrariando uno de los fines esenciales del Estado, el cual es garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y en la Ley.

En virtud de lo anterior y con el fin de no vulnerar derechos constitucionales, el juzgado accederá a la petición de dejar sin efecto el inciso cuarto del auto proferido el 24 de febrero de 2020, que no tuvo en cuenta la contestación de la EPS Sanitas, porque erróneamente la consideró extemporánea.

Como consecuencia, se ordenará tener por contestada la demanda por parte de la EPS SANITAS y, se admitirán los llamamientos en garantía solicitados por dicha EPS.

Por las razones precedentemente expuestas, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira,

Resuelve

Primero: Dejar sin efecto el inciso cuarto del auto proferido el 24 de febrero de 2020, que tuvo por extemporánea la contestación a la demanda por parte de la EPS SANITAS.

Segundo: En consecuencia, se tiene por contestada oportunamente la demanda por parte de la EPS SANITAS S.A.

Ya se le reconoció personería a la abogada Sandra Milena Cardozo Angulo.

Tercero: En su oportunidad se dará traslado a las excepciones de mérito propuestas por la EPS Sanitas y a la objeción al juramento estimatorio.

Cuarto: En autos aparte, se resolverá la admisión de los llamamientos en garantía formulados por la EPS SANITAS.

Notifíquese,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elizabeth Rueda Luján', followed by a large, stylized flourish or initial 'L'.

Elizabeth Rueda Luján
Jueza

JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO DE PEREIRA
El auto que antecede, es notificado por anotación en
el Estado electrónico No. 28 del 22 febrero de 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joaquín Eladio Vargas Montoya', with a large, stylized initial 'J'.

JOAQUIN ELADIO VARGAS MONTOYA
SECRETARIO

gb